

Revolución Democrática para una Izquierda Unida ganadora

Tesis 8: Europa: diagnóstico y posición ante el proyecto de integración europeo, y en concreto, ante el actual modelo de integración definido en la Europa del euro

La crisis de las personas que solicitan asilo; la gestión del Brexit y la propia gestión de la crisis económica y sus resultados han puesto de manifiesto el agotamiento del modelo de integración propuesto desde Maastricht. La UE se ha convertido en parte de los problemas y no de las soluciones, los estudios demoscópicos ponen de relieve una caída sin precedentes del apoyo al proceso de integración o la confianza en las instituciones comunitarias. Y por si no fuera suficiente, una buena parte del rechazo a esta UE lo está capitalizando políticamente la extrema derecha con un discurso tan peligroso como mentiroso.

No podrá decirse que la palabra crisis es ajena a la Unión Europea. Prácticamente desde su constitución los avatares de la construcción europea han ido vinculados a situaciones de estancamiento y/o de incertidumbre en el proceso de integración. Hasta ahora era normal considerar que esas situaciones se saldaban con algún progreso en el proceso de transferencia de soberanía nacional y de reforzamiento de las instituciones comunitarias, en una suerte de teleología del proceso de integración que ha mostrado toda su insustancialidad en estos momentos. El futuro de la UE no es necesariamente un modelo de estado federal al que caminamos inexorablemente de la mano fría, pero firme, del mercado único.

No es la primera vez que la idea de crisis sobrevuela Bruselas, proyectando una sombra amenazante sobre el futuro de Europa. No es que nadie haya propuesto o proyectado un futuro sin la UE, pero hay dudas más que razonables sobre lo que quedará del famoso modelo europeo tras la gestión de este tsunami económico y del resto de conflictos que han estallado en la cara de los dirigentes europeos ante su sorpresa o complicidad.

En lo que hace a la crisis económica y la gestión de la misma, ambas han puesto de relieve hasta qué punto el “mantra” neoliberal estaba interiorizado en la cabeza y en los corazones de las principales familias políticas en los estados nacionales. Resumiendo: tanto la tradición socialdemócrata como la demócratacristiana, ambas abanderadas de este proceso de integración, se han señalado también como defensoras –con mayores o menores dosis de pasión- de la ortodoxia macroeconómica vinculada al pensamiento económico dominante y de las recetas de devaluación interna, estabilidad presupuestaria, privatizaciones y auxilio sin límites al sistema financiero que han caracterizado la salida a la crisis por doquier.

En lo que nos concierne, el resultado es una pérdida llamativa de derechos sociales y de retroceso de las políticas públicas en toda Europa. La intensidad mayor en la destrucción se la llevan los países del Sur de Europa, precisamente aquellos a los que los años de prosperidad sobrevenida solo habían llegado para construir un estado del “medio-estar”. Pero la dinámica general va en la misma dirección: dismantelar los estados del bienestar. Recientemente en Holanda, el príncipe llamaba, en un giro político-conceptual digno de ser reseñado, a transformar el “estado social en un estado participativo” (sic).

Aún en 2010, el Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa presidido por Felipe González destacaba el hecho de vivir “un punto crítico de nuestra historia”, y llamaba a utilizar la crisis como una oportunidad, así como a resolver dos desafíos relacionados: “garantizar la continuidad de nuestro modelo social y económico, y desarrollar los medios de apoyar y defender dicho modelo”. Difícilmente podría seguir defendiéndose eso mismo hoy.

Pero este giro en los objetivos de la UE manifiesta un problema desde varias perspectivas: en primer lugar, está por ver si esta modificación de los objetivos originales de la UE, toda vez que la gestión de la crisis se ha llevado o se va a llevar por delante lo que queda de los estados del bienestar, mantiene el vínculo de las dos grandes familias políticas en relación con el proyecto europeo. En segundo lugar, obliga a la tradición socialdemócrata a reformular sus objetivos a corto y medio plazo. En tercer lugar, quiebra una seña de identidad sobre la que se había construido hasta ahora un icono que singularizaba a Europa frente a la globalización anglosajona, y con ello una de las razones de legitimación del proceso tecnocrático y despolitizado de integración.

En ausencia de legitimidad de origen –vinculada a procesos democráticos de decisión– la UE se había legitimado sobre la base de los efectos prácticos de sus políticas, en la medida en que parecía que el resultado de las mismas era tanto una mejora del bienestar general como un incremento del valor añadido específicamente europeo, consistente en un estado social que ofrecía perspectivas de integración, seguridad y bienestar creciente a la mayoría. Sin esa perspectiva de integración y bienestar, la UE ha comenzado a ser percibida por su ciudadanía como parte de los problemas y no como parte de las soluciones. En consecuencia su gestión ha adquirido naturaleza política, esto es conflictiva y partidaria y su popularidad ha caído a niveles desconocidos desde que se tiene noticia en los eurobarómetros (1974).

El último estudio demoscópico europeo (Eurobarómetro 85/2015) publicado señala que en España hemos pasado en 6 años de una valoración positiva de +42 puntos a una negativa de -58 puntos. Lo que significa que hoy hay un 17% de españoles que confían en la UE frente a un 75% que desconfía.

Una dimensión problemática más es que también las tradiciones alternativas de izquierda se ven interrogadas sobre sus propuestas. En este espacio nunca hubo unanimidad ni acuerdo respecto a qué pensar de la UE y ahora, ocupado el espacio del repliegue nacional e identitario por las fuerzas de extrema derecha, queda por ver qué harán las organizaciones situadas tradicionalmente a la izquierda de la socialdemocracia.

Es importante a nuestro juicio, esta articulación de crisis económica, crisis inducida del modelo social europeo y pérdida de legitimidad del proyecto de integración mismo. En realidad, algunos de los problemas que hoy se consideran más destacables no son nuevos, pero su notoriedad se ha acrecentado en este nuevo escenario.

Podríamos destacar, de una parte, el fin de la supuesta relación virtuosa entre Europa y la Unión Europea, que se han venido utilizando como conceptos equivalentes, en una confusión entre civilización (si la hubiere) y proyecto político, claramente excesiva. La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve la existencia de varias Europas que no necesariamente convergen y se encuentran, rompiendo con ello el mito de que el proyecto de integración acercaba tanto las economías como las sociedades europeas.

Por otra parte, despojado de esta perspectiva civilizatoria, el proyecto de integración aparece como lo que realmente ha sido desde el comienzo: un diseño político y económico fruto de diversas y diferentes correlaciones de fuerza. Construido sin un

propósito previo pero sí mediante un método que hacía de la despolitización y de las servidumbres tecnocráticas el motivo mismo de su existencia.

La lógica del proceso de integración funcionó mientras ha sido posible mantener la ficción de que la UE se encargaba de cuestiones que requerían de un saber técnico y la política seguía residiendo –con sus grandezas y miserias- en el espacio estatal-nacional. La crisis ha puesto especialmente de manifiesto la naturaleza infundada de esa creencia, y que la UE es un proyecto político de los pies a la cabeza, con una elevadísima capacidad decisonal, pero también con un severísimo déficit democrático. Esto quiere decir que la UE toma decisiones sobre cuestiones relevantes y decisivas para la vida de las gentes, pero lo hace a través de procedimientos insuficientemente democráticos y escasamente controlables por instituciones representativas.

En efecto, desde sus orígenes, la UE cuenta con una asimetría estructural que condiciona su presente y su futuro. La centralidad acordada a la construcción del mercado único ha habilitado a las instituciones europeas para llevar a cabo una tarea minuciosa de voladura controlada de los estados del bienestar. Este objetivo económico es el que ha dado sentido al funcionamiento de las instituciones europeas y ha contado con el apoyo de los estados mismos, convencidos de la bondad y pertinencia de esta estrategia. Pronto se descubrió que remover los obstáculos que dificultaban la construcción del mercado único significaba limitar las capacidades de control de las administraciones públicas sobre el desarrollo económico; favorecer el empoderamiento de las empresas en la determinación de los objetivos económicos y desmontar los derechos sociales y laborales, en el buen entendimiento de que se trataba de privilegios y obstáculos en la búsqueda de un bien mayor. No pocos sindicatos aceptaron con gusto esta dinámica.

Podrían haberse transferido a la UE las capacidades para reconstruir, en el espacio europeo, las condiciones de regulación pública del mercado desmontadas en los estados-nación, pero no fue el caso. O podrían haberse determinado objetivos sociales o laborales que acompañasen, moderasen o condicionasen la instauración del mercado único. Nada impedía que hubiera podido hacerse de esta manera, pero tampoco fue el caso. Así, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo se convirtieron en motores del desmantelamiento de las políticas públicas de control del mercado, convertidas en los chivos expiatorios de todos los males de las economías europeas. Pero los ajustes necesarios para paliar –o intentarlo- los efectos de ese desmontaje sistemático de los estados sociales quedaron en manos exclusivamente de los gobiernos. No se transfirieron capacidades de regulación en política social, ni se legisló a nivel europeo para asegurar umbrales homologables de protección social o indicadores exigibles de gasto social.

La UE después de Maastricht

El Tratado de Maastrich (1992) significó la consolidación de ese proceso histórico, y confundió a las opiniones públicas europeas, hasta entonces entusiastas del proceso de integración. El apoyo a la UE cayó por primera vez en más de diez puntos respecto al período anterior y, hasta ahora, no sólo no se han recuperado los niveles de aceptación previos a Maastricht, sino que se han deteriorado significativamente.

Las reformas laborales, el fin del sector público, el ataque sin precedentes a las administraciones públicas y sus funcionarios, el deterioro consciente y deliberado de los servicios esenciales como educación o sanidad, forman parte de esta estrategia de reconfiguración de nuestras sociedades.

El pacto social que nos proponen está fundado sobre el miedo, la desigualdad y la ausencia de derechos; la defensa a ultranza de derechos los civiles, sociales y medioambientales, deben definir un proceso de integración europeo solidario

Ahora parece evidente que la lógica neoliberal, impuesta desde Maastricht, ha encontrado en la gestión de la crisis una ocasión única para dismantelar los estados del bienestar y reconfigurar nuestras sociedades. El objetivo es ese nuevo pacto social perseguido tenazmente por las clases dominantes basado en un desplazamiento sin precedentes de poder político y económico desde las mayorías sociales a las minorías dominantes.

Nada de lo que ocurre, sin embargo, es particularmente extraño o ajeno a la lógica que las instituciones europeas venían desarrollando desde hace años. El proceso de integración conoció una inflexión cualitativa con el Tratado de Maastricht (1992), una afirmación de su orientación neoliberal y economicista y el fin de cualquier sueño de integración política. Vencieron las tesis que consideraron el proceso de construcción de la UE como una oportunidad para poner fin a los estados del bienestar y a la extensión de derechos sociales.

Desde entonces las iniciativas políticas tendentes a mejorar la perspectiva de un proyecto político integrado o han colapsado o se han plegado a la lógica neoliberal dominante. Ninguno de los Tratados posteriores a Maastricht solucionó los graves problemas que el proceso de integración ya abordaba y la no nacida Constitución Europea fue un notorio fiasco que puso fin a cualquier ensueño de integración. Desde entonces la prioridad de las instituciones europeas ha sido el dismantelamiento de las políticas sociales.

La gestión de la crisis ha acentuado esa dinámica y ha desplazado el centro de operaciones hacia el Consejo Europeo, es decir, al motor político de esta Unión Europea y al órgano con menos legitimidad democrática de cuantos constituyen el entramado institucional de la Unión. En sus reuniones se toman decisiones al margen de las agendas estatales, fuera de cualquier capacidad de control de los Parlamentos nacionales y, por supuesto, sin que los compromisos políticos que llevaron a esos gobiernos al poder a través de las elecciones, cuenten lo más mínimo.

Se ha impuesto una lógica austericida que no soluciona ninguno de los problemas a los que supuestamente intenta dar respuesta y, eso sí, agrava todos los indicadores económicos. Pero parece obvio, a estas alturas, que el objetivo de la obsesión por la austeridad tiene muy poco que ver con las preocupaciones económicas reales y mucho más con una estrategia que tiene al estado social como obsesión y como víctima.

Un frankenstein institucional nada democrático

En este punto, la actual arquitectura institucional de la UE ha revelado sus severas limitaciones democráticas y sus servicios prestados a la despolitización de decisiones sustancialmente políticas. El frankenstein institucional que conforman la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo, ha favorecido un marco decisional donde la participación ciudadana y la capacidad de control misma sobre lo que estas instituciones deciden están excluidas.

El modelo es ilegible políticamente para la mayoría de la sociedad europea y no existen condiciones para que instancias ajenas a las mismas instituciones puedan ejercer su capacidad de control y exigencia de responsabilidad. La arquitectura institucional de la UE hace prácticamente imposible que puedan materializarse las exigencias de

responsabilidad política, rendición de cuentas, control democrático y capacidad de escuchar a la sociedad, exigibles para cualquier institución democrática.

Esto permite que las instituciones de la UE —especialmente la Comisión Europea— puedan decir que no saben nada de las políticas de austeridad, y que los gobiernos nacionales a su vez culpen sistemáticamente a la Comisión Europea y sus exigencias de las mencionadas políticas. En este contexto un mero aumento de los poderes del Parlamento Europeo, aunque pudiera paliar parcialmente el problema, no resuelve la condición no democrática de este diseño institucional. Sirva como anécdota de este desencuentro entre intenciones y realidades, y como ejemplo (aquí ya sin consideraciones anecdóticas) de las dificultades sistémicas de la arquitectura institucional de la UE para ofrecer espacios de participación y control democrático, que el año 2013 fuera declarado por la Comisión Europea como el año de la ciudadanía europea; y terminado ese momento señalado para la participación ciudadana, ya en 2016 la ciudadanía concernida no se haya siquiera enterado de que estaba convocada para algo.

Debemos reconocer que aquí aparece un problema vinculado al tipo de respuesta que la ciudadanía dé a la pregunta de ¿qué queremos hacer con la UE? Si la respuesta es “marcharse a toda prisa”, el entramado institucional y sus complejidades serán solo preocupación de académicos y curiosos. Si la respuesta es “apoyamos la perspectiva del proceso de integración, pero esto no nos vale”, entonces tenemos que encontrar respuestas a la cuestión de cómo construir una democracia supranacional. Es decir, el entramado institucional existente hasta ahora reproduce y amplifica el déficit democrático de manera permanente y, por tanto, no nos sirve si nos preocupa hacer de la UE un proyecto democrático. Pero tenemos que construir un diseño democrático supranacional que hasta ahora, carece de modelo. Este diseño debería dar respuestas a las problemáticas de la participación ciudadana en el espacio europeo y la construcción de un espacio público europeo, y a la cuestión de si es necesaria alguna identidad europea para hacer posibles lógicas de participación y empoderamiento; de qué papel deben jugar los parlamentos nacionales en este diseño, y de cuánta transferencia de soberanía es soportable sin que se pierda la condición democrática de las decisiones políticas.

Un aspecto más e igualmente importante tiene que ver con la dimensión exterior de la UE. Hay razones relacionadas con la pérdida de peso y dinamismo económico de Europa en relación con otras más pujantes. Además de esa dimensión económica, está la proyección exterior de la UE y su presumida condición de defensora de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales.

Hay que decir que la historia de la UE se compagina mal con esa voluntad de proponerse como un baluarte de los derechos humanos en un mundo hostil y hobbesiano. Lo cierto es que la política exterior de la Unión Europea ha sido un espacio más caracterizado por los discursos que por las prácticas. Éstas han quedado en manos de los estados, que a menudo han buscado complicidades en la UE, no siempre con éxito. La gestión de la UE en la crisis migratoria ha llenado de vergüenza y tristeza a los millones de europeos/as que confiaban en que la Unión se comprometiera con sus valores y actuara de acuerdo a ellos.

En conclusión, los desafíos y preguntas que a día de hoy son pertinentes en relación con la UE tienen un calado sistémico. No son asuntos de matiz o de detalle, no se trata de mejorar una u otra política. La crisis económica y la gestión de la misma han desnudado el proyecto de sus ropajes tecnocráticos y despolitizados y han mostrado al emperador desnudo. La cuestión ha dejado de ser la de “empujar para hacer posible ‘más Europa’”. En realidad, habría que decir que esa formulación fue, en general, una

manera de justificar el proceso de integración realmente existente eludiendo más preguntas sobre el mismo.

No defendemos ni apostamos el repliegue sobre lo nacional. No defendemos ideas que nos asemejarían a los neonazis europeos y que hacen descansar su propuesta sobre presupuestos identitarios: recuperar la soberanía, la dignidad y la legitimidad democrática no significa abandonar el proyecto de integración europeo. A condición de terminar con la lógica neoliberal que domina el actual y modificar sustancialmente su estructura institucional. Apostamos por la refundación democrática y participativa de este proyecto. Sin la ciudadanía europea ningún proyecto de integración tiene sentido. Con políticas económicas contra la mayoría de la población la idea de la integración se debilita y se hace tan innecesaria como incomprensible para la población. Hay que decir que los principales responsables del ascenso de partidos de extrema derecha, neonazis y populismos xenófobos de todo tipo son las actuales instituciones europeas y sus políticas suicidas, pero también los gobiernos que las alientan, defienden y promueven y que utilizan, a menudo, la cobertura del paraguas europeo para justificar sus desmanes.

Su estrategia de enfrentar poblaciones para eludir responsabilidades o ganar tiempo tiene y tendrá consecuencias perversas y negativas para todos/as.

Aunque es evidente la necesidad de defender la idea de un proyecto de integración supranacional democrático, social y ecológico, constatamos que esta Unión Europea se aleja a pasos agigantados tanto de esas demandas de derechos como de sus propios ideales originales. La UE de hoy se ha convertido en una máquina trituradora de derechos y en un componente esencial de las políticas de desmantelamiento de los estados sociales en Europa. Pero estamos convencidos/as que el repliegue nacional, la idea de una vuelta a supuestos valores radicados en los estados nacionales, es una perspectiva no solo defensiva sino irreal. Somos internacionalistas y no queremos volver al mundo de las confrontaciones de clase nacionales, cuando podemos y debemos pensar en reconstruir un modelo de acuerdo, colaboración y negociación supranacional.

El estado nación no es un invento de la clase obrera, nuestra vocación sigue siendo internacionalista. Nuestra apuesta, desde Europa, es un ‘Nuevo Internacionalismo’ que combata el imperialismo capitalista y a regímenes derivados del imperialismo soviético

Nos sumamos a la idea de debatir sobre este asunto con profundidad, no podemos eludir este debate ni mucho menos. Pero debemos hacerlo desde lo concreto, desde agotar las posibilidades de reforma de lo existente a demandar un “Proceso constituyente para una nueva Europa”. Creemos que determinadas afirmaciones y giros que, so pretexto de la responsabilidad de la UE, exculpan, de facto, a los gobiernos nacionales por sus obligaciones, abona el camino a la extrema derecha o a modelos de integración estilo Gran Bretaña, tan exquisitamente funcionales al capitalismo financiero internacional.